REVISTA DE DERECHO

AÑO XIX

ENERO - MARZO DE 1951

N.º 75

DIRECTOR: SR. ORLANDO TAPIA SUÁREZ

COMITE DIRECTIVO:

SRES.:

ROLANDO MERINO REYES

QUINTILIANO MONSALVE J.

JUAN BIANCHI BIANCHI

VICTOR VILLAVICENCIO G.

MARIO CERDA MEDINA

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA

CONCEPCION

HECTOR BRAIN RIOJA

**OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REFORMA DEL
CODIGO PENAL CHILENO**

(Continuación)

TITULO III

DE LAS PENAS

94.—**De la clasificación de las penas.**—Siguiendo el imperativo del decreto que nombró a la Comisión de reforma, el Proyecto, no altera sustancialmente el sistema punitivo de nuestro actual Código. Se limita a eliminar penas que presentan dificultades en su aplicación práctica; a modificar la duración de algunas y la naturaleza de otras, dentro de la misma idea actual; a introducir en el cuerpo del Código, las disposiciones de las leyes sobre libertad condicional y suspensión de la pena; y agregar un párrafo especial para la "indemnización" o reparación del daño causado por el delito.

95.—De aquí que la primera observación que merece hacerse es la de lamentar la ausencia total de los nuevos sistemas penales que ya tienen aplicación en las legislaciones modernas de otros países. Siempre hemos sostenido que en la feroz contienda doctrinaria sobre el Derecho Penal que hemos presenciado en los últimos tiempos, hay, por lo menos, una conclusión útil que se refiere al nuevo sentido de la "pena". A este nuevo sentido que hace de

la sanción penal, no un medio de "castigo" que haga "sufrir" material y moralmente al delincuente por el "delito" cometido, sino una medida de "reformación" que readapta al elemento extraviado a su colectividad de origen, y que reparando en lo posible los males causados por el delito, tiende principalmente a la regeneración del autor del hecho punible.

96.—No es la oportunidad, atendida la naturaleza de estos comentarios para entrar en detalles sobre tan importante y complicado aspecto, —que ya lo hemos analizado en otros artículos de esta Revista—, pero conviene, sin embargo, dejar bien establecida nuestra opinión en el sentido de que, la Comisión de Reforma, aún dentro de los límites estrictos del decreto de creación y nombramiento, pudo orientar su Proyecto hacia la nueva orientación penal, no meramente doctrinaria, sino esencialmente práctica que impera en todos los actuales regímenes penales de los países adelantados.

97.—Debió, por lo tanto, eliminarse del todo el concepto del "encarcelamiento" o pena de mera privación de libertad, cambiando hasta el nombre de estas penas, y colocando, por ejemplo, en vez del "presidio" el de "trabajo en reclusión"; eliminarse también, la pena de presidio perpetuo que es la negación del sistema moderno, porque indica que no se persigue en absoluto la readaptación del individuo al medio, y la sustitución de ella por "internamientos en establecimientos de reclusión de insanos". Para los que no sufren alteraciones que hagan necesaria su reclusión en tales establecimientos, no debe existir la pena perpetua. Sólo debe mantenerse la pena de muerte, para aquellos, que sin poderseles catalogar como anormales, sean de una perversión total, y cometan los más graves delitos a fin de servir como amenaza y prevención.

Debió asimismo eliminarse, del todo, la pena restrictiva de libertad destinada a cumplirse fuera del país, como el "extrañamiento". Y, por último, debió proponerse un sistema de sustitutos de las penas y de medidas preventivas. No desconocemos que la incorporación en el Proyecto, de las leyes sobre Libertad condicional y Suspensión de la pena tiene, naturalmente, esta ten-

PROYECTO DE REFORMA DEL C. PENAL CHILENO

39

dencia; pero nos parece insuficiente para una reforma de la importancia de la que analizamos. Debió ser de la reforma, la idea de colocar entre las penas de nuestro Código, y no de leyes especiales, "las colonias agrícolas" y en general todos aquellos medios por los cuales hoy día se vale el Estado para impedir los delitos o para readaptar al delincuente.

98.—Comprendemos, sin embargo, que todo ello se estrallaría contra nuestro siempre grave e insoluble problema: el económico. Porque el proyecto de reformar la naturaleza de las penas significa la necesidad inmediata de su financiamiento; los medios para ello no se encuentran fácilmente. Pero tal problema no debe ser óbice para el penalista; el reformador de la ley debe proponer las medidas científicamente convenientes, necesarias y útiles al fin que se persigue, que otros son los encargados de darles su financiamiento, o rechazarlas por su falta de medios económicos. Para salvar tal evento, bien pudo disponerse en un artículo transitorio diciendo que "mientras se creen los establecimientos necesarios a la reforma, seguirán rigiendo las actuales disposiciones"; que por lo demás se diferencian muy poco de las que ahora se proponen. De este modo, se habría dado un paso decidido, y de trascendencia, para lograr de una vez por todas la "reforma penal" más indispensable. Porque es más indispensable, en nuestro país, modificar el sistema de las penas y su aplicación, que modificar el problema de la "comunicabilidad" o del "concurso".

99.—Dejamos, pues, para otra oportunidad un estudio más detallado de las medidas que bien podrían haberse propuesto para sustituir a nuestro sistema carcelario y demás caducas formas de penalidad y pasamos a hacer una ligera relación de las novedades que la reforma ofrece. En esta relación omitiremos copiar íntegramente, como hacíamos hasta ahora, los textos de los códigos vigente y proyectado, en razón de que las modificaciones son ligeras. Cuando ocurra lo contrario volveremos al sistema inicial.

100.—**Eliminación de penas.**—El artículo N.º 19, que corresponde al actual 21 contiene, en el Proyecto, la conocida Escala General de penas, de la que se han eliminado las siguientes: a) la

de reclusión, por corresponder en la práctica, con el trabajo obligado del Reglamento Carcelario, al presidio mismo; b) la de confinamiento, por las dificultades de hecho en su aplicación en países extranjeros; c) la de destierro, por su mínima aplicación real y utilidad práctica; d) de entre las inhabilitaciones, las especiales; e) las suspensiones; unas y otras porque se estimó que se llenaba la finalidad punible sólo con las que dejaban vigentes y porque resulta contradictorio —se dijo— que en las inhabilitaciones especiales, el sujeto, está "habilitado" para ciertos cargos y no para otros en circunstancias que su calidad delictual influye en todos; y f) todas las penas accesorias, de cadena o grillete, encierro en celda solitaria e incomunicación, porque la primera es degradante, y las otras corresponden más bien al tratamiento administrativo de las cárceles que al tratamiento legal del delito.

101.—Eliminación del artículo 24.—Por este artículo el actual código dice que toda sentencia criminal lleva envuelta la obligación de pagar costas y perjuicios. Se elimina toda la disposición porque, por una parte la obligación relativa a las costas es de materia más bien procesal; y por la otra, porque en lo que se refiere a perjuicios se agrega al final del título uno especial para esta materia. De modo que la eliminación del artículo 24 actual no debe significar, en caso alguno, desestimación de las obligaciones impuestas al reo, sino que por el contrario, una forma de ampliarlas y ordenarlas metódicamente.

102.—Naturaleza penal de la multa.—Modificando el actual artículo 20, dice el proyecto que la multa "sólo se reputará pena cuando haya sido impuesta por sentencia emanada de los tribunales de justicia con jurisdicción en lo criminal".

Aquello se hizo con el fin de separar, lo más claramente posible, las penas aplicadas por los tribunales del crimen de las de otras autoridades como la Dirección General de Sanidad, de Bibliotecas, de Impuestos Internos, etc.

103.—Límites o duración de las penas. Penas temporales.—Se proyecta aumentar el tiempo de duración de la pena de prisión elevando su máximo hasta ciento ochenta días. Se argumenta, sen-

PROYECTO DE REFORMA DEL C. PENAL CHILENO

41

cillamente, de que se estima muy breve el plazo de sesenta días actualmente vigente.

En verdad, el tiempo que fija la ley no es en definitiva el que se impone al reo. Es el juez quien dentro de circunstancias variadas fija la duración de la pena en cada paso particular. De aquí entonces que no tenga la mayor importancia práctica esa variación que "triplica" el máximo vigente, porque, el Juez podrá dentro de la flexibilidad legal, mantenerse en plazos cortos, para aquellos delitos manifiestamente inocentes, como son la mayoría de las faltas a que se impone prisión. Por otra parte la duración de todo proceso criminal excede de sesenta días por lo cual en la práctica esta pena ha resultado ilusoria. Los que son condenados a ella han cumplido en la cárcel tres y más veces dicho tiempo.

Sólo estas consideraciones permiten aceptar la tesis del proyecto, porque la naturaleza de los actos penados como faltas son tan simples, tan sencillos, tan insignificantes, que en verdad, no son acreedores a mayor pena que la actualmente vigente. Son todos actos inintencionales, en la mayoría de las veces, que en general no causan mayores daños que molestias pasajeras y sin trascendencia; y, que por último, en la mayoría de las veces, también quedan impunes por la inacción de la actividad policial y judicial ante tan pequeños acontecimientos.

Con motivo de la elevación del máximo de la pena de prisión se eleva, automáticamente, el mínimo del presidio menor que le sigue el que comienza en ciento ochenta y un días. Igualmente se eleva en la misma forma la de sujeción a la vigilancia de la autoridad.

104.—Cuantía de la multa.— Se eleva, tratándose de crímenes, hasta doscientos cincuenta mil pesos; de simples delitos, hasta cincuenta mil pesos; y de faltas hasta cinco mil pesos.

Este aumento responde, con evidente razón, a la variación del valor de nuestra moneda, que hace hoy día ridícula la pena actual porque no importa para el penado gravamen alguno por su infima cuantía.

Sin embargo, no participamos de la idea del Proyecto de elevar la pena de multa para las faltas hasta cinco mil pesos. La razón que tenemos es que las faltas son siempre, cometidas por indi-

viduos modestos, de muy escasos recursos, para los cuales la variación del valor de la moneda actúa en sentido inverso, o sea, que a menor valor de ella, menos tienen y más pobres están. Luego exigirles una mayor cantidad, cuando menos tienen, y hacérselas pagar en prisión si no cubren el importe, resulta una total injusticia.

(Continuará)